

**TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE GUERRERO.**

**R. 50/2023.**



SALA SUPERIOR

**TOCA NÚMERO:** TJA/SS/REV/242/2023.

**EXPEDIENTE NÚMERO:** TJA/SRA/I/803/2021.

**ACTOR:** .....

**AUTORIDADES DEMANDADAS:** DIRECTOR DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL Y; DIRECTOR DE INGRESOS; AMBOS DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO.

**MAGISTRADA PONENTE:** MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS.

--- Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a treinta de marzo de dos mil veintitrés.

--- **VISTOS** para resolver en definitiva por esta Sala Superior, los autos del toca número **TJA/SS/REV/242/2023**, relativo al recurso de revisión interpuesto por las **autoridades demandadas**, a través de su representante autorizado **LIC. ....**, en contra de la **sentencia definitiva** de fecha **veintitrés de marzo de dos mil veintidós**, dictada por la Magistrada de la Sala Regional Acapulco I de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, en el juicio de nulidad a que se contrae el expediente citado al rubro, y;

### **R E S U L T A N D O**

1. Mediante escrito presentado con fecha **veintiuno de junio de dos mil veintiuno**, ante la Oficialía de partes común de las Salas Regionales Acapulco de este Tribunal, compareció el **C. ....**, a demandar la nulidad de los actos impugnados consistentes en:

***“La determinación de pago predial 2021 que modifica la base gravable de \$730,701.90 a la cantidad de \$2,922.807.60, al predio catastrado a nombre de la parte actora clasificado con la Cuenta Catastral 030-001-005-0107 ”.***

Relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes.

2. Por cuestión de turno, correspondió conocer de la demanda a la Magistrada Instructora de la Sala Regional Acapulco I, y por auto de fecha **veintidós de junio de dos mil veintiuno**, admitió a trámite la demanda, registró para tal efecto el expediente número **TJA/SRA/I/803/2021**, y ordenó el emplazamiento de las autoridades demandadas, mismas que dieron contestación en **tiempo y forma** a la demanda instaurada en su contra, como consta en el acuerdo de fecha **ocho de diciembre de dos mil veintiuno**.

3. Seguida que fue la secuela procesal con fecha **diez de marzo de dos mil veintidós**, se llevó a cabo la audiencia de ley, y los autos se pusieron en estado de resolución.

4. Con fecha **veintitrés de marzo de dos mil veintidós**, la Magistrada Instructora de la Sala Regional Acapulco I de este Tribunal, dictó la sentencia definitiva en la que declaró la nulidad del acto impugnado al actualizarse la causal de invalidez prevista en el artículo 138, fracción II, del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, número 763, para el siguiente efecto:

***“...que las autoridades demandadas dejen insubsistente el cobro realizado a la actora mediante Factura con número de folio 2100247787, de veintiuno de enero de dos mil veintiuno, relativo a la cuenta catastral 030-001-005-0107, correspondiente al periodo 01/2021 al 06/2021, respecto al inmueble ubicado en Calle: ----- de esta Ciudad de Acapulco de Juárez, Guerrero, y procedan a emitir el cobro del impuesto predial correspondiente al año dos mil veintiuno, en el que se respete la base gravable relativa a la cuenta catastral número 030-001-005-0107, por la cantidad de \$730,701.90 (SETECIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS UN PESOS 90/100 M. N.), correspondiente al año fiscal dos mil veinte, contenida en la Factura de Pago con número de folio 2000098563 de fecha veintinueve de enero de dos mil veinte, y de resultar diferencias a su favor se realice la devolución correspondiente.”***

5. Inconformes las **autoridades demandadas** con el sentido de la sentencia, interpusieron el recurso de revisión ante la Sala Regional Instructora en el que hicieron valer los agravios que estimaron pertinentes mediante escrito recibido en la oficialía de partes de la citada Sala Regional con fecha **veinte de abril de dos mil veintidós**, en consecuencia, se ordenó correr traslado con copia de los agravios a la **parte actora**, para el efecto a que se refiere el artículo 221 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, número 763, y una vez cumplido lo anterior, se remitió el recurso y el expediente en cita a esta Sala Superior para su respectiva calificación.

6. Con fecha **treinta y uno de enero de dos mil veintitrés**, esta Sala Superior recibió el recurso de mérito, el cual calificado de procedente e integrado que fue el toca número **TJA/SS/REV/242/2023**, se turnó a la Magistrada ponente el **trece de marzo de dos mil veintitrés**, para su estudio y resolución correspondiente; y

## **C O N S I D E R A N D O**

I. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 218, fracción VIII, del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero número 763, la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, es **competente** para conocer y resolver del recurso de revisión interpuesto por las **autoridades demandadas**, en contra de la sentencia definitiva de fecha **veintitrés de marzo de dos mil veintidós**, dictada dentro del expediente número **TJA/SRA/I/803/2021**, por la Magistrada de la Sala Regional Acapulco I de este Tribunal, en la que declaró la **nulidad** de los actos impugnados.

II. Que el artículo 219 del Código de Procedimientos Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, establece que el recurso de revisión debe interponerse ante la Sala Regional que haya emitido la resolución, dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación de la misma, y en el asunto que nos ocupa consta en autos a foja **57** que la sentencia recurrida fué notificada a las autoridades demandadas el día **ocho de abril de dos mil veintidós**, por lo que le surtió efectos dicha notificación en esa misma fecha, en consecuencia, el término para interponer el recurso les transcurrió del **dieciocho al veintidós de abril de dos mil veintidós**, en tanto que el escrito de mérito se presentó en la Sala Regional el día **veinte de abril de ese mismo año**, como se aprecia de la certificación hecha por la Primera Secretaria de Acuerdos de la Sala Regional Acapulco I de éste Tribunal; entonces, el recurso de **revisión** fué presentado **dentro** del término que señala el numeral antes invocado.

III. En términos del artículo 220 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero número 763, la parte revisionista vierte en concepto de agravios varios argumentos, mismos que se transcriben a continuación:

**Primero.-** Causa agravios la resolución que mediante el presente escrito se recurre ya que viola en perjuicio de mis representadas lo previsto en el Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero; artículos 14 y 16 Constitucionales; Principio de Exhaustividad; Principio de Congruencia Jurídica; Principio de Legalidad, el Principio de

Igualdad de Partes, que debe de contener toda sentencia, pues en los dos considerandos señalados como **SEGUNDO** y **TERCERO**, de este fallo en el apartado en que causa agravios se lee lo siguiente:

**SEGUNDO.-**

(...)

*Sustancialmente el DIRECTOR DE INGRESOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, al contestar la demanda, invocó la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 79 fracción IV del Código de la Materia, argumentando que no emitió acto administrativo que vulnere la esfera jurídica del actor, así como, tampoco se acredita con constancia alguna que el acto que le clama lo haya emitido, ordenado o ejecutado; al respecto, esta Juzgadora considera que no le asiste la razón jurídica a la mencionada autoridad, ello es así porque tiene una actuación directa en la emisión de actos relacionados con el impuesto predial.*

*Sustancialmente, el DIRECTOR DE CATASTRO IMPUESTO PREDIAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, invocó la causal de improcedencia y sobreseimiento prevista por los artículos 78 fracción XI y 79 fracción II del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, Número 763, argumentando que la parte actora pretende impugnar los parámetros de valuación que sirvieron de base para la determinación del aumento el valor catastral para el ejercicio fiscal 2020-2021, señalando que las facultades de su representada se encuentran contempladas en los artículos 10, II y 12 de la Ley Número 638, de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, argumentando además que los artículos de los cuales se duele la actora son considerados como actos consentidos de forma tácita ya que expresa que del análisis que se realiza se podrá corroborar que el contenido es exactamente el mismo.*

*Así mismo, hacer valer la extemporaneidad en que se presenta la demanda como es de quince días hábiles que prevé el artículo 49 del Código de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero número 763, en virtud que el accionante el veintiuno de enero de dos mil veintiuno, realizó el pago del impuesto predial correspondiente al ejercicio del año 2021 y presenta su demanda hasta el veintiuno de junio del mencionado año, por el inició de recepción de demandas de los justiciables, a partir del veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, rebasando el plazo del artículo invocado.*

(...)

*De una interpretación armónica de los dispositivos legales antes invocados, se corrobora que el procedimiento ante este Órgano de Justicia Administrativa es improcedente contra actos que hayan sido consentidos de manera expresa o tácita, entendiéndose por estos últimos, aquellos en contra de los que no se promovió demanda en los plazos señalados por este Código, así mismo establece que procede el sobreseimiento del juicio cuando en su tramitación apareciera o sobreviniera alguna de las causas de improcedencia, ya que la demanda debe*

*presentarse en la Sala Regional correspondiente al domicilio del actor, ante la autoridad demandada o por correo certificado con acuse de recibo, así cuando el actor tenga su domicilio fuera de la sede de la Sala, pero siempre dentro de los quince días hábiles contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del acto que se reclame o el día en que se haya tenido conocimiento del mismo o se hubiese ostentado sabedor del mismo.*

*Ahora bien, a juicio de esta Sala Instructora, no se acreditan las causales de improcedencia y sobreseimiento previstas por los artículos XI, y 79 fracción II, del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, Número 763, en razón de que contrario a lo que sostiene la autoridad demandada el acto impugnado en el presente juicio lo constituye el incremento de la base gravable del inmueble propiedad del actor, y no los parámetros de valuación para realizarlo, por lo tanto, procede desestimar las causales invocadas por la demandada.*

*Por cuanto a la extemporaneidad de la demanda, no se acredita, en razón, de que derivado del Acuerdo de diecisiete de marzo de dos mil veinte, aprobado por el Pleno de la Sala Superior, en cumplimiento al Acuerdo por el que se declaró como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-COV2 (COVID), publicado el treinta de marzo del año en mención en el Periódico Oficial de la Federación, hubo suspensión de todos los términos procesales de los juicios que se estaban sustanciando en las Salas Regionales y Superior de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, pausa que se prorrogó nuevamente del uno al treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno; no obstante lo anterior, el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa, consideró que debido al prolongado periodo de suspensión de plazos procesales decretado desde el inicio de la declaración de la pandemia de diecisiete de marzo de dos mil veinte, a la fecha de uno al treinta de marzo de dos mil veintiuno, ordenó incorporar actividades que permitieran anticipar el quehacer jurisdiccional, con la finalidad de evitar congestionamientos al momento de levantarse la suspensión de los plazos correspondiente, determinando que los justiciables podrían presentar sus escritos de demanda ante las oficialías de partes, de cada Sala, a partir del dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, no el veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, como erróneamente lo señala la autoridad demandada, para el único efecto que fueran registradas y radicadas, en la inteligencia que serían notificadas a partir del primer día hábil en que se aperturaran los plazos procesales, apertura que sucedió el uno de junio de dos mil veintiuno, en atención a que el Gobernador del Estado, como Presidente del Consejo Estatal de Salud, informó mediante publicación en el Periódico Oficial del Estado de veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, con base a las estadísticas y seguimiento de los contagios por la enfermedad del COVID-19, debido a la disminución de número de contagios, derivado del comportamiento decreciente de hospitalizaciones y defunciones, así como del avance de la vacunación, todos los Municipios transitaron a semáforo verde; es así, que las actividades jurisdiccionales se aperturaron a partir del uno de junio de dos mil veintiuno; por lo tanto, aun cuando el actor señaló que tuvo conocimiento del acto, el tres de marzo de dos*

*mil veintiuno, no se pueden considerar como actos consentidos, en virtud que todavía en esa fecha no se aperturaban los plazos procesales; aunado a ello, la existencia e interés legítimo de la parte actora se encuentran debidamente acreditados con las FACTURA con número de folio 2100247787 de veintiuno de enero de dos mil veintiuno, por la cantidad de \$10,031.10 (DIEZ MIL TREINTA Y UN PESOS 10/100 M.N.); que contiene el acto impugnado siguiente: “La determinación de pago predial 2021 que modifica la base gravable de \$730,701.90 a la cantidad de \$2,922,807.60 al predio catastrado a nombre de la parte actora, clasificado con la Cuenta Catastral 030-001-005-0107”, a nombre de la ciudadana -----, por lo que se puede establecer que es destinatario del acto de autoridad impugnado en el presente juicio de nulidad, elementos de prueba a los que se le otorga pleno valor probatorio, de acuerdo a los artículos 98, 132, 134 fracción I y 135 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, Número 763; en consecuencia, no se acreditan las causales de improcedencia y sobreseimiento invocadas por las autoridades demandadas.*

Causa afectación a mis representadas, toda vez que la Magistrada Instructora, al considerar por cuanto a las causales de improcedencia y sobreseimiento transgrede en contra de mis representadas lo previsto en el artículo 137 fracción I, del Código de la Materia, en razón de que únicamente asienta que la causal de improcedencia y sobreseimiento sujeta a estudio resulta INFUNDADA, de conformidad con los argumentos vertidos por el demandante en su concepto de nulidad, lo cual deja en estado de incertidumbre jurídica por cuanto a mis representadas ya que del análisis de la redacción se advierte que solamente se pronuncia por cuanto a la causal prevista en el artículo 78 fracción XI, la cual nos indica contra los actos que hayan sido consentidos expresa o tácitamente.

Sin embargo de dicha transcripción se advierte que la Magistrada instructora, se enfoca solamente en una de las causales de improcedencia y sobreseimiento ofrecidas por mis representadas, dejando de considerar las demás, transgrediendo en contra de mis representadas Principios Constitucionales Fundamentales como lo son Legalidad, Seguridad Jurídica e Imparcialidad.

Apoya lo anterior, las Jurisprudencia número 60 y 61, visibles en las páginas 101 a 103 de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, correspondiente a Salas y Tesis Comunes, que expresan:

**“ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA.** *Contra ellos es improcedente el amparo, y debe sobreseerse en el juicio respectivo.”*

**“ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE.** *Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala.”*

Cabe destacar que el artículo 137 fracción I, del Código de la Materia prevé lo siguiente:

*Artículo 137. Las sentencias que dicten las salas del Tribunal no requieren de formulismo alguno, pero deberán contener lo siguiente:*

*I. El análisis de las causales de improcedencia o sobreseimiento del juicio, en su caso;*

No obstante en el presente asunto, el mismo demandante acepta haber consentido los actos en razón de que señala como la fecha en que tuvo conocimiento de los actos y del auto de radicación se advierte la fecha en que de manera extemporánea ingreso su demanda de nulidad ante ese Tribunal, siendo evidente que resulta declarar el presente juicio improcedente, toda vez que se actualiza una causal de indudable improcedencia.

Derivado de lo anterior, se tiene que en el caso particular, se actualiza la causal de improcedencia y sobreseimiento prevista en los artículos 78, fracción XI en relación con el arábigo 79, fracción II, del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero número 763, pues la parte actora consintió tácitamente las normas que impugna, y por tal razón ese Tribunal a su cargo, se encuentra imposibilitado para realizar pronunciamiento al respecto, debiendo declarar la validez.

**CONTINUANDO CON LO MANIFESTADO EN EL CONSIDERANDO TERCERO DE LA SENTENCIA**

**TERCERO.-**

(...)

*De la interpretación armónica a los preceptos legales Constitucionales y Reglamentarios en comento, se advierte que nadie puede ser afectado en sus posesiones, sino por medio de un mandamiento escrito de la autoridad competente debidamente fundado y motivado, entendiéndose por fundamentación la citación del precepto legal aplicable al caso concreto y por motivación se entiende las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a las autoridades a concluir que la parte actora se encuentra en dicho supuesto; así mismo, en materia de contribución se establece que todos los mexicanos in (sic) excepción alguna tienen la obligación de contribuir con los gastos públicos, en los tres órdenes de gobierno donde se resida o se realice la actividad, de manera proporcional y equitativa conforme lo dispongan las leyes, y que la Dirección de Catastro llevará a cabo la valuación y revaluación catastral de los predios de forma unitaria o masiva; la notificación de los nuevos valores catastrales unitarios se hará mediante Edictos, que se publicaran por tres veces consecutivas en el Periódico Oficial del Gobierno del estado, en uno de los periódicos de mayor circulación en el Municipio, así como en la Gaceta Municipal correspondiente, en la que determinará los datos que deban ser publicados, cuidando en todo momento la confidencialidad de los mismos, tomando en consideración la Ley Número 466 de Protección de Datos Personales en Posesión, cuidando en todo momento la confidencialidad de los mismos, tomando en consideración la Ley Número 466 de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Guerrero, lo cual; se tendrá como base*

*del impuesto el valor catastral del predio y de las construcciones, apartamento o local en condominio, los del régimen de tiempo compartido y multipropiedad, conforme a las disposiciones establecidas en la Ley de Catastro Municipal vigente y su Reglamento, además de que el valor catastral determinado y declarado por el contribuyente, a más tardar el último día del mes de febrero de cada ejercicio fiscal; el valor catastral deberá ser determinado y declarado por el contribuyente, dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que ocurra alguna modificación de los predios o en su caso de las construcciones; si el contribuyente incumple con lo establecido en las fracciones I, II y III del presente artículo, o bien los valores declarados y determinados sean inferiores a los valores catastrales, la dirección o área de catastro municipal procederá a determinar el valor catastral del inmueble, aplicando las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción aprobados por el Congreso del Estado, para el ejercicio fiscal que corresponda; y la base modificada surtirá efectos a partir del bimestre siguiente en que se notifique nuevo avalúo. Respecto, del estímulo fiscal, se desprende que se otorga un estímulo fiscal a los predios ubicados en zonas urbanas y sub-urbanas, incorporados al padrón catastral mediante programas sociales de la regulación de la tenencia de la tierra, federal, estatal y municipal; se pagará el 3.9 al millar anual sobre el 50 por ciento del valor catastral determinado, así como a los predios edificados propiedad de personas con discapacidad, padres y madres solteras, personas mayores de sesenta años, hasta por el valor catastral de 20, 142 veces la unidad de medida y actualización, considerando que se aplica de forma gradual y no al 50 por ciento en su totalidad si se encuentra ubicado en zonas residenciales la casa habitación de la cual pagarán predial, con base a los principios de proporcionalidad y equidad tributaria, así como pensionados y jubilados de nacionalidad mexicana, de igual manera, los contribuyentes deberán pagar en las oficinas recaudadoras autorizadas por bimestres adelantados los primeros quince días de los meses de enero, marzo, junio, septiembre y noviembre de cada año, cuyas bases de tributación sean superiores a 1,000 la cantidad de medida y actualización vigente, conforme al objeto, (sic) base, tarifa o cuota y periodo de pago.*

*Así mismo, el artículo 138 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, Número 763, establece los supuestos normativos que dan origen a declarar la nulidad e invalidez del acto impugnado.*

*En el caso sometido a estudio, ponderando los conceptos de nulidad e invalidez vertidos por la parte actora, esta Sala Instructora considera que resulta fundado y operante para declarar la nulidad del acto impugnado, en atención a las consideraciones jurídicas siguientes:*

*Del análisis de los autos que integran el presente sumario, se advierte que si bien es cierto que el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé el deber de los gobernados de contribuir para los gastos públicos del Municipio% en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes; también es verdad que el sujeto pasivo de la relación tributaria debe conocer la forma cierta de contribuir para los gastos públicos; y en el caso en particular, la propia autoridad demandada DIRECTOR DE*



CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO, admitió que no existió una revaluación catastral del inmueble del actor y solamente utilizó las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción manifestación que para esta Instancia Regional, constituye el reconocimiento expreso de la emisión del acto que se le atribuye, en términos del artículo 134 fracción I, del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, Número 763; consecuentemente, tampoco hubo notificación a la parte actora del aumento de la base gravable, y que, como puede advertirse de la FACTURA con folio 2000098563 con fecha de emisión señala una base de \$730,701.90 (SETECIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS UN PESOS 90/100 M.N.), correspondiente al año fiscal dos mil veinte, misma que corre agregada a foja IO del expediente, así mismo, del estudio de la FACTURA con número de folio 2100247787, de fecha veintiuno de enero de dos mil veintiuno, relativo a la cuenta catastral 030-001-0050107, correspondiente al periodo 01/20021 (sic) al 06/2021, respecto al inmueble ubicado en Calle: -----de esta Ciudad de Acapulco de Juárez, Guerrero, visible a folio 21 del expediente se advierte que contiene los siguientes conceptos: "UNIDAD: E48 Unidad de servicio, CLAVE CONCEPTO: 93161600, CONCEPTO: 2021 (BIM1-BIM6) IMPUESTO PREDIAL: P.U: \$11,398.98, DESCUENTO \$1,367.88; TOTAL: \$11,398.98; SUBTOTAL: \$11,398.98; DESCUENTO: \$1,367.88; TOTAL: \$10,031.10; USO G03- Gastos en general; METODO DE PAGO: PUE- Pago en una sola exhibición; MONEDA: MXN; FORMA DE PAGO 01-EFECTIVO; CONDICIÓN DE PAGO: CONTADO"; y una base gravable de \$2,922,807.60 (DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDÓS ML OCHOCIENTOS SIETE PESOS (60/100 MM.)), respecto al inmueble propiedad de ERZA VOADEB COHEN, ubicado en Calle: ----- de esta Ciudad de Acapulco de Juárez, Guerrero, con número de cuenta catastral 030-001-005-0107. En razón a lo anterior, resulta procedente declarar la nulidad e invalidez de acto impugnado, al actualizarse la fracción II del artículo 138 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de 763, relativa a la omisión de las formalidades legales que deben revestir los actos administrativos; lo anterior, con independencia de que el DIRECTOR DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, señale que del análisis minucioso que realice este Órgano Jurisdiccional a los comprobantes de pago 2020 y 2021, advertirá que la actora en el ejercicio fiscal 2021 erogó la cantidad de \$10,031.10 (DIEZ MIL TREINTA Y UN PESOS 10/100 M.N.), por el pago del Impuesto Predial, teniendo como resultado un aumento de diez centavos en relación a la cantidad pagada para el ejercicio fiscal 2020.

(...)

Sin que sea óbice a lo anterior, lo argumentado por la autoridad demandada DIRECTOR DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO, que la figura jurídica de estímulo fiscal no puede ser analizada conforme el artículo 31, párrafo primero, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que el beneficio otorgado en el artículo 9, incisos f) y g) de la Ley Número 038 de Ingresos para el

*Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal 2021, no atiende a la capacidad económica de los sujetos obligados, sino al beneficio que genera a los contribuyentes que presentan condiciones, específicas, sin que el aludido estímulo incida en los elementos esenciales de la contribución, como son: objeto, sujeto, base, tasa o tarifa, época de pago, ni otro que forme parte de su mecánica sustancial, agregando además que se hizo una actualización y para no afectar a los contribuyentes, optaron por reducir la tasa impositiva del 12 al millar por el 3.9 al millar, ello, con la finalidad de que los contribuyentes erogaran el mismo importe del año inmediato anterior. Precizando que La Suprema Corte de Justicia de la Nación, define que el estímulo fiscal es el beneficio de carácter económico concedido por la Ley, a un sujeto pasivo, con el objeto de obtener ciertos fines de carácter municipal Así también, señala, que son instrumentos que buscan motivar la realización de actividades determinadas, obteniendo los sujetos a los que ha dirigido un beneficio fiscal. Así mismo, el doctrinario José Isauro López López, en su diccionario Contable Administrativo y Fiscal, define que los estímulos fiscales son aquellos incentivos otorgados a los contribuyentes, estipulados en las leyes fiscales o mediante reglas de carácter general; normalmente para compensar los efectos que provocan ciertos fenómenos económicos o naturales o como aliciente de inversión en ciertas ramas de la economía. De igual forma, se tiene que el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México en el Diccionario Jurídico Mexicano, señala la siguiente definición: “Estímulos Fiscales: Beneficio de carácter económico concedido por la ley fiscal al sujeto pasivo de un impuesto, con el objeto de obtener de él ciertos fines parafiscales, que no representan un desvanecimiento de la obligación tributaria, sino que está es asumida por el Estado; y así sucesivamente transcribe definiciones, que concluye que, el estímulo es una prestación de carácter económico que se traduce en una deducción que el beneficiario puede hacer valer a su favor, respecto de un impuesto a su cargo. De ahí, que el estímulo fiscal, es una cantidad económica que se enfrenta a las cantidades del erario público que debe ser ingresada por concepto de contribuciones, es decir, se trata de una disminución del importe de la obligación tributaria surgida de la realización del hecho imponible de un tributo; criterio que no es compartido, por esta juzgadora, toda vez que, haciendo un comparativo con el pago realizado en el año dos mil veinte, por la cantidad de \$10,031.00 (DIEZ MIL TREINTA Y UN PESOS 00/100 M.N.), y el actual dos mil veinte, se cobraron por concepto de impuesto predial \$8,768.42 (OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 42/100 M.N.), más impuestos adicionales 15% de Pro Educación y Pro Caminos, cada uno por la cantidad de \$1,315.26 (UN MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS 26/100 M.N.), sumados se hizo el monto de \$11,398.94 (ONCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 94/100 M.N.), cantidad que finalmente arrojó el monto total de \$10,031.00 (DIEZ MIL TREINTA Y UN PESOS 00/100 M.N.), cantidad cubierta por el actor, sobre una r; base gravable de \$730,701.90 (SETECIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS UN PESOS 90/100 M.N.), datos reflejados en el comprobante de pago FACTURA con número de folio FACTURA con número de folio 2000098563 con fecha de emisión veintinueve de enero de dos mil veinte, y para este año dos mil veintiuno, hubo una determinación de pago por concepto de impuesto predial de*

*\$11,398.98 (ONCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 98/100 M.N.), y del cual, hubo un descuento de \$1,367.88 (UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 88/100 M.N.), resaltando dicha cantidad arroja la cantidad total de \$10,031.10 (DIEZ MIL TREINTA Y UN PESOS 10/100 M.N.), que cubrió el actor sobre la base gravable de (DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDÓS ML OCHOCIENTOS SIETE PESOS 60/100 M. N.), datos implícitos en la Factura con número de folio 2100247787, de veintiuno de enero de dos mil veintiuno, relativo a la cuneta catastral 030-001-005-0107; por lo que, finalmente resulta ser un argumento falaz al estar equiparando el impuesto predial del año dos mil veinte, al año dos mil veintiuno, toda vez que como ha quedado precisado en líneas anteriores, al respecto se advierte que el cobro del impuesto predial se hizo sobre la base gravable que fue incrementada, por lo que no se constate un beneficio económico a favor del contribuyente, con motivo de reducir la tasa impositiva del 12 al millar en el año dos mil veinte, por el 3.9 al millar del presente año dos mil veintiuno, que prevé el artículo 9 incisos f) y g) de la Ley Número 638 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal 2021.*

*En otro aspecto, lo esgrimido por la autoridad demandada DIRECTOR DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO, en el sentido de que la boleta del impuesto predial (recibo de pago) o Comprobante Fiscal Digital de Internet (CFDI) constituye un acto de la administración, al ser la misma autoridad que emite y que por sí mismo, no constituye ningún efecto jurídico, que es necesario que cumpla con lo señalado en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con los requisitos de fundamentación y motivación, en razón de que únicamente son necesarios y trascendentales cuando la autoridad emisora emita un acto administrativo considerado como una manifestación unilateral, concreta y externa de la voluntad, que exprese una decisión de una autoridad administrativa competente, en ejercicio de la potestad pública, la cual puede crear, reconocer modificar, transmitir o extinguir derechos u obligaciones. Y que el jurista -----  
-----, expresa que no toda actuación de la administración se expresa a través de actos administrativos, ya que en ocasiones realiza actos que no reúnen las características de éstos, por lo que se puede hacer una diferenciación entre actos administrativos y actos de la administración, es decir, toda actuación se dará a través de actos de la administración, pero sólo serán considerados actos administrativos aquella “declaración unilateral y concreta del órgano ejecutivo que produce efectos jurídicos directos e inmediatos”, así consideran que tales actos pueden ser formularios múltiples de pago, los cuales constituyen actos de la administración, de quien los emite, que por sí mismos, no producen ningún efecto jurídico, son medios en donde de llegar a cubrirse el concepto de lo que se va a pagar constituiría un documento que compruebe que pagó algo, invocando la jurisprudencia con número de registro 176438 cuyo rubro indica “TENENCIA O USO DE VEHICULOS. EL RECIBO QUE ACREDITA SU ENTERO NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE IMPUGNA EL ACTO DE APLICACIÓN, para finalmente concluir que de conformidad con el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, no prevé que*

*el CFDI debe estar fundado y motivado, como lo prevé el artículo 16 Constitucional antes mencionado y 137 del Código Fiscal del Estado de Guerrero, Número 429, ya que según es considerado como un acto de la administración, circunstancias por el cual la emisión de dicho comprobante es conforme a derecho, criterio que no es compartido por esta sentenciadora, en razón de que, el recibo de pago o comprobante fiscal digital por internet CFDI denominado también factura, no puede considerarse como un acto de la administración, ya que este finalmente refleja la determinación unilateral de una revaluación catastral, sobre las cuales las demandadas realizaron un incremento desproporcional a la base gravable para el ejercicio fiscal 2021, incremento que el actor se vio constreñido a pagar, de lo contrario, se aplicarían, consecuentemente, multas y recargos, lo que traduce en un acto de autoridad con características de unilateralidad y coercitividad, contrario a lo esgrimido por las demandadas, sin que la declaratoria de nulidad, impida a las autoridades demandadas ejercer sus facultades de comprobación, verificación y recaudación catastral.  
(...)*

*En las narradas consideraciones jurídicas, y en ejercicio de las facultades que la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero Número 467, que rige a este Órgano Jurisdiccional y el Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, Número 763 le otorgan a esta Sala Regional, se declara la nulidad del acto consistente en “La determinación de pago predial 2021 que modifica la base gravable de a la cantidad de \$2,922,807.60, al predio catastrado a nombre de la parte actora, clasificado con la Cuenta Catastral 030-001-005-0107”, emitido por el DIRECTOR DE INGRESOS Y DIRECTOR DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL, AMBOS DEL H. A YUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, en el expediente alfanumérico TJA/SRA/I/803/2021, incoado por -----, al actualizarse, la causal de invalidez prevista por el artículo 138, fracción II del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, Número 763, el efecto de la presente sentencia, es para que las autoridades demandadas dejen insubsistente el cobro realizado a la actora mediante Factura con número de folio 2100247787, de veintiuno de enero de dos mil veintiuno, relativo a la cuenta catastral 030-001-005-0107, correspondiente al periodo 01/2021 al 06/2021, respecto al inmueble ubicado en Calle: ----- de esta Ciudad de Acapulco de Juárez, Guerrero, y procedan a emitir el cobro del impuesto predial correspondiente al año dos mil veintiuno, en el que se respete la base gravable relativa a la cuenta catastral número 030-001005-0107, por la cantidad de \$730,701.90 (SETECIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS UN PESOS 90/100 M.N.), correspondiente al año fiscal dos mil veinte, contenida en la Factura de Pago con número de folio 2000098563 de fecha veintinueve de enero de dos mil veinte, y de resultar diferencias a su favor se realice la devolución correspondiente.*

**SEGUNDO.**- Ahora bien, resulta violatorio lo considerado por la Magistrada de esa Sala, para determinar la nulidad de los actos emitidos por mi representada, por la supuesta falta de motivación

y fundamentación, así como las razones particulares causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión de los actos, además la competencia por parte de quien emite los actos, señalando los principios de legalidad y seguridad jurídica establecidos en el artículo 16 Constitucional, sin embargo, resulta evidente el favoritismo para demandante, ya que la aplicación de los principios resultan aplicables solo para conveniencia de quien demanda y no de las demandadas, transgrediendo en contra de mis representadas el principio de igualdad de partes.

Así pues, el cobro realizado por el demandante fue emitido en base a ordenamientos legales específicos previstos en los artículos 9, 10, 11, 12, 13, 14, y 15 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, número 638, para el Ejercicio Fiscal 2021.

Es de señalarse a ese H. Tribunal de Justicia Administrativa, que **infundado** resulta ser lo considerado por la Magistrada Actuante, al argumentar que se transgrede en contra de la actora lo previsto en el artículo 14 Constitucional, sin embargo, tratándose de un acto realizado a voluntad del gobernado y dentro de la legislación catastral vigente, es decir que los preceptos que facultan al Municipio para cobrar el impuesto predial, son previstos en la Ley de Ingresos número 638 para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero.

De lo anterior, efectivamente, las tablas de valores unitarios de uso de suelo y construcción sufrió modificación acorde a derecho el cual se encuentra debidamente fundado y motivado; asimismo, el pago realizado por el contribuyente es el mismo al del año inmediato anterior, el cual no le ocasiona perjuicio alguno su patrimonio del demandante.

Contrario a lo que manifiesta la Magistrada de la Segunda Sala, la reforma que sufrió las tablas de valores son acorde a derecho, ya que del análisis que realice ese H. Tribunal al Decreto número 640, por el que se aprueban las tablas de valores unitarios de uso de suelo y construcción, publicado el 25 de Diciembre del 2020, advertirá que, en los **considerandos tercero y cuarto** de la exposición de motivos, se plasmó literalmente lo siguiente: "Que para la elaboración de las tablas de valores catastrales que servirán de base, para el cobro de las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal 2021, de conformidad con lo que establece el artículo 25 fracciones I, II, III y IV del Reglamento de la Ley número 676 de Catastro para los Municipios del Estado de Guerrero, la Secretaría de Administración y Finanzas en coordinación con la Dirección de Catastro e Impuesto Predial, realizó un estudio de mercado, sobre el suelo urbano y construcciones con el fin de actualizar los valores de los predios, que durante 15 años no se habían actualizado, siendo valores desproporcionados a la realidad, por lo que se hace necesario acercarse lo más que se pueda al valor real o de mercado, en virtud de que las operaciones inmobiliarias que se presentan contienen los valores muy por arriba de lo que muestran las tablas catastrales; es importante señalar que para no incrementar las contribuciones inmobiliarias se propone la reducción de la tasa impositiva considerada la más alta del país que ha sido del 12, para ahora ser solo del 3.9 al millar anual para el ejercicio fiscal 2021 y que en la propuesta de la Tabla de Valores Unitarios de suelo y construcción que servirán de base,

para el cobro de las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal 2021, va enfocada en cumplir el mandato constitucional en término del artículo quinto transitorio de la reforma que tuvo el artículo 115 de la Constitución General de la República, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de diciembre del año 1999, que marcaba como plazo el ejercicio fiscal del año 2002 para equiparar los valores catastrales a los de mercado y en contraparte reducir la tasa impositiva para la determinación del impuesto predial”; asimismo, se acredita que los actos de los cuales se duele la parte actora se encuentran debidamente fundados y motivados.

Por otra parte, se tiene que el artículo 9 incisos f) y g) de la Ley de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2021, no es vulneratorio del artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni de los principios de equidad y legalidad tributaria, y que para su mayor comprensión se trae a la vista el artículo 31, fracción IV, Constitucional, el cual señala lo siguiente:

### **CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS**

Artículo 31.- Son obligaciones de los mexicanos:

IV.- Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los Estados, de la Ciudad de México y del Municipio en que residan la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.

Ahora bien, la fracción IV del artículo 31 Constitucional, contiene las siguientes garantías:

1. Las contribuciones deben destinarse al gasto público de la Federación, como de los Estados, de la Ciudad de México y del Municipio.
2. Deben ser proporcionales y equitativas.
3. Deben estar establecidas en Ley.

Al efecto el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido en la Jurisprudencia de la fuente del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 187-192 primera parte, página 113, lo siguiente:

**“PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIAS ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL.”.** El artículo 31, fracción IV, de la Constitución establece los principios de proporcionalidad y equidad en los tributos. La proporcionalidad radica, medularmente, en que los sujetos pasivos deben contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad económica, debiendo aportar una parte justa y adecuada de sus ingresos, utilidades o rendimientos. Conforme a este principio, los gravámenes deben fijarse de acuerdo con la capacidad económica de cada sujeto pasivo, de manera que las personas que obtengan ingresos elevados tributen en forma cualitativa superior a los de medianos y reducidos recursos. El cumplimiento de este principio se realiza a través de tarifas progresivas, pues mediante ellas se consigue que cubran un impuesto en monto superior los contribuyentes de más elevados recursos. Expresado, en otros términos, la proporcionalidad se encuentra vinculada con la capacidad económica de los contribuyentes que debe ser gravada diferencialmente, conforme a tarifas progresivas, para que en cada caso el impacto sea distinto, no sólo en cantidad, sino

en lo tocante al mayor o menor sacrificio reflejado cualitativamente en la disminución patrimonial que proceda, y que debe encontrarse en proporción a los ingresos obtenidos. El principio de equidad radica medularmente en la igualdad ante la misma ley tributaria de todos los sujetos pasivos de un mismo tributo, los que en tales condiciones deben recibir un tratamiento idéntico en lo concerniente a hipótesis de causación, acumulación de ingresos gravables, deducciones permitidas, plazos de pago, etcétera, debiendo únicamente variar las tarifas tributarias aplicables, de acuerdo con la capacidad económica de cada contribuyente, para respetar el principio de proporcionalidad antes mencionado. La equidad tributaria significa, en consecuencia, que los contribuyentes de un mismo impuesto deben guardar una situación de igualdad frente a la norma jurídica que lo establece y regula.

Conforme al criterio anterior, la **proporcionalidad** radica básicamente, en que los sujetos pasivos deben de contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad contributiva; y para que el principio de proporcionalidad permita que los sujetos pasivos contribuyan a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad contributiva, los tributos deben fijarse de manera que las personas que obtengan ingresos elevados, tributen en forma cualitativamente superior a los de medianos y reducidos recursos.

La Jurisprudencia invocada concluye en que la **proporcionalidad** se encuentra vinculada con la capacidad económica de los contribuyentes que debe ser gravada diferencialmente, para que en cada caso el impacto sea distinto, no solo en cantidad, sino al tocante al mayor o menor sacrificio reflejado cualitativamente en la disminución patrimonial que proceda, y que deba encontrarse en proporción a los ingresos obtenidos.

Sin embargo, no debe de perderse de vista que la aplicación de los criterios anteriormente expuestos, deben de centrarse en un ámbito tanto de justicia fiscal como del gobernado, toda vez, como se ha dicho, se está en presencia de un precepto constitucional que contiene al mismo tiempo distintos derechos, pero también la obligación individual pública de los gobernados de contribuir para los gastos públicos de los diferentes niveles de gobierno: Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios.

Ahora bien, como se dijo con antelación, resulta ser infundado el argumento de la Magistrada Instructora, en atención a los requisitos de proporcionalidad y equidad, ya que de ninguna forma se está transgrediendo lo dispuesto por los artículos 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Apoya lo anterior, la Tesis con número de registro 2022996 de la Décima Época, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto es el siguiente:

***“IMPUESTO PREDIAL. AL ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE LEÓN, GUANAJUATO, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2020, QUE PREVE UN BENEFICIO FISCAL PARA LOS CONTRIBUYENTES CUYOS INMUEBLES ESTÁN UBICADOS FUERA DE LOS LÍMITES URBANOS Y SUBURBANOS SEÑALADOS EN EL PLANO DE VALORES DE TERRENO PARA DICHO MUNICIPIO, NO LE SON APLICABLES***

**LOS PRINCIPIOS DE JUSTICIA TRIBUTARIA.** *Hechos: Las autoridades recurrentes señalan que el beneficio fiscal contenido en el artículo 48 de la Ley de Ingresos para el Municipio de León, Guanajuato, para el ejercicio fiscal del año 2020, consistente en la aplicación del factor del 0.80 sobre el monto del impuesto predial que les corresponde pagar a los contribuyentes cuyos inmuebles se encuentran ubicados fuera de los límites urbanos y suburbanos señalados en el Plano de Valores de Terreno para dicho Municipio, no incide en la mecánica del tributo, porque se aplica una vez que el impuesto predial es determinado, de manera que al no incorporarse a los elementos de la contribución, no le son aplicables los principios de justicia fiscal establecidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.*

*Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que al artículo 48 citado, que prevé el beneficio fiscal aludido, no le son aplicables los principios de justicia tributaria.*

*Justificación: **Lo anterior, porque el estímulo fiscal mencionado no tiene relevancia impositiva en el impuesto predial, pues no se asocia a alguno de los elementos esenciales de esa contribución –objeto, base, tasa o tarifa y época de pago–, porque se materializa a través de una disminución en la cantidad resultante del cálculo del tributo y, por ende, no se adhiere a aquéllos ni integra su mecánica.***

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.

En ese orden de ideas, la figura jurídica de estímulo fiscal no puede ser analizada conforme al artículo 31, párrafo primero, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que el beneficio otorgado en el artículo 9, incisos f) y g) de la Ley de Ingresos Municipal vigente, **no atiende capacidad económica de los sujetos obligados, sino al beneficio que generan los contribuyentes que presentan condiciones específicas; sin que el aludido estímulo incida en los elementos esenciales de la contribución, ni en otro que forme parte de su mecánica sustancial;** de ahí, lo infundado de los argumentos.

Sirve de sustento, la Jurisprudencia número 2002148, de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Libro XIV, noviembre de 2012, Tomo 2, página 1243, cuyo rubro y texto es el siguiente:

**ESTÍMULO FISCAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 19 DE LA LEY DE EGRESOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN PARA EL AÑO 2011 Y EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO EN MATERIA VEHICULAR A LA ECONOMÍA FAMILIAR DE LA MISMA ENTIDAD. NO PUEDE ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS PRINCIPIOS DE JUSTICIA TRIBUTARIA. El beneficio en cuestión constituye un estímulo fiscal que no tiene relevancia impositiva en el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos de donde surge el deber de pago, ya que no incide en alguno de sus elementos esenciales como objeto, base, tasa o tarifa, ni integra su mecánica, pues lo único que se pretende con su otorgamiento es apoyar la economía familiar mediante la entrega en dinero de un porcentaje del valor del vehículo respectivo para sufragar los costos que conlleva su uso; por tanto, al no medir la capacidad contributiva de los sujetos obligados ni pretender impedir que se cause el impuesto respectivo, dicho beneficio no puede analizarse a la luz de los principios de justicia tributaria previstos en el**



**artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que no impide que su regularidad constitucional pueda examinarse al tenor del artículo 1o. de la Constitución Federal.**

Ahora, concerniente al argumento de la actora consistente en que en el artículo 12 de la Ley número 638 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal 2021, contemplan conceptos no definidos y amplían el objeto del Impuesto; dicho argumento resulta ser **inoperante**.

Siendo entonces que de acuerdo a lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en diversos criterios que ha emitido en materia fiscal, que para el efecto de restituir únicamente en la parte que considere excesivo el pago del 2021 al del 2020, y no así en forma total, es decir, los Órganos Jurisdiccionales **no deben liberar a los contribuyentes en forma total de la obligación a la cual se encuentran sujetos**; pues en caso, de conceder dicha solicitud se causaría un detrimento económico a la hacienda municipal, además que tratándose de la contribución impuesto lo que se pondera es la **capacidad contributiva, y que en el caso en concreto la parte actora realizó tanto en el ejercicio fiscal 2020 y 2021 el mismo pago por el Impuesto Predial, es decir, no existe perjuicio a su patrimonio; de ahí que no es viable que se le exima de pago ni tampoco que se realice la devolución solicitada.**

En efecto, **infundado** resultan ser las manifestaciones vertidas por la parte actora, ya que contrario a lo que manifiesta, en ningún momento esta autoridad dejó de observar lo dispuesto en el artículo 16 en razón de que esta autoridad no efectuó ningún procedimiento de revaluación, por lo que previo a manifestar lo infundado de su argumento, es importante precisar a ese Tribunal, lo siguiente:

De conformidad con los artículos 115, fracción IV, antepenúltimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 178, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, los Ayuntamientos tienen la facultad de proponer a las legislaturas las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, y que para su mayor comprensión se cita lo siguiente:

**CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS**

***“Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, con forme a las bases siguientes:***

***[...].***

***IV. [...].***

***Los Ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las legislaturas estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de***

**base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.**

[...].

**CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO**

**Artículo 178.** Los Ayuntamientos son competentes para:

[...]

**XI. Proponer al Congreso del Estado las cuotas y tarifas aplicables a los impuestos, derechos, contribuciones, productos y aprovechamientos municipales, así como las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria;**

[...]

De lo anterior, se aprecia que los Ayuntamientos en el ámbito de su competencia y con plena libertad configurativa propondrán a las legislaturas estatales las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria (predial), las cuales revisten una importancia fundamental ya que impactan la base gravable de la contribución.

Efectivamente, el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en principio, aquellos conceptos de la Hacienda Municipal que quedan sujetos al régimen de libre administración hacendaria, tal como lo ha sostenido el Máximo Tribunal de la Nación, en el sentido de que la Hacienda Municipal se integra por los ingresos, activos y pasivos de los Municipios y que, por su parte, la libre administración hacendaria debe entenderse como un régimen establecido en la Constitución Federal, tendiente a fortalecer la autonomía y autosuficiencia económica de los Municipios, con el fin de que éstos puedan tener libre administración y aplicación de sus recursos y satisfacer sus necesidades, todo esto en los términos que fijen las leyes y para el cumplimiento de sus fines públicos, de tal manera que, atendiendo a sus necesidades propias y siendo éstos los que de mejor manera y en forma más cercana las conocen, pueden priorizar la aplicación de sus recursos sin que se vean afectados por intereses ajenos o por cuestiones que, por desconocimiento u otra razón, los obligaran a ejercer sus recursos en rubros no prioritarios o distintos de sus necesidades reales.

Ahora bien, de entre aquellos conceptos en particular que forman la Hacienda Municipal, afectó al régimen establecido por el Poder Reformador de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tendientes a fortalecer la autonomía y autosuficiencia económica de los Municipios, están las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.

De lo anterior, se advierte que la A quo, antes de entrar al estudio de fondo, debe valorar las causas de sobreseimiento e improcedencia, asimismo, valorar, motivar y fundar, sus argumentos y consideraciones, así como tomar en consideración(sic) las constancias de autos y de forma clara, precisa y lógica, a fin

de dictar resolución definitiva; de lo cual se advierte que el presente fallo viola directamente los preceptos 4, 26, 78, 79, 128, 129 y 130 fracciones II y IV del Código de la de materia, como se aprecia en toda la sentencia recurrida, en el entendido que la Sala responsable no respeta los principios de Legalidad, Seguridad Jurídica, Imparcialidad, Congruencia y Exhaustividad; asimismo, no funda ni motiva sus argumentos, así pues no entra al fondo del asunto de acuerdo a las constancias que obran en el presente juicio que nos ocupa.

Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 143, volumen 97-02, Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, cuyo rubro y texto dicen:

**“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.** De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas.”

En concordancia con las disposiciones legales transcritas, es evidente que la sentencia de dieciocho de mayo del dos mil veintidós, fue dictada en contravención a ellas, ya que la Magistrada fue omisa en realizar un pronunciamiento de todas y cada una de las cuestiones que fueron sometidas a su conocimiento, es decir, no realizó un examen exhaustivo de la contestación de demanda, así como de las causales de improcedencia que fueron ofrecidas por mis representadas, ya que de haberlo hecho se habría percatado que el presente juicio es improcedente.

Asimismo, es aplicable al caso, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página doscientos cincuenta y cinco del tomo XIX, abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dispone:

**“ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO.** El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudir a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no

*únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.”*

Es claro precisar que la sentencia que se impugna resulta ilegal, ya que es contraria a lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional, puesto que refleja la falta de un examen acucioso, detenido, profundo, al que no escape nada de lo que pueda ser significativo para encontrar la verdad sobre los hechos controvertidos, o de las posibilidades que ofrezca cada medio probatorio, razón suficiente para revocar la sentencia impugnada y decretar el sobreseimiento del juicio.

Resulta aplicable por analogía la Tesis que a la letra dice:

**“EXHAUSTIVIDAD. SU EXIGENCIA IMPLICA LA MAYOR CALIDAD POSIBLE DE LAS SENTENCIAS, PARA CUMPLIR CON LA PLENITUD EXIGIDA POR EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL. El artículo 17 constitucional consigna los principios rectores de la impartición de justicia, para hacer efectivo el derecho a la jurisdicción. Uno de estos principios es el de la completitud, que impone al juzgador la obligación de resolver todos los litigios que se presenten para su conocimiento en su integridad, sin dejar nada pendiente, con el objeto de que el fallo que se dicte declare el derecho y deje abierto el camino franco para su ejecución o cumplimiento, sin necesidad de nuevos procedimientos judiciales o administrativos. Para cumplir cabalmente con la completitud exigida por la Constitución, se impone a los tribunales la obligación de examinar con exhaustividad todas las cuestiones atinentes al proceso puesto en su conocimiento, y esto se refleja en un examen acucioso, detenido, profundo, al que no escape nada de lo que pueda ser significativo para encontrar la verdad sobre los hechos controvertidos, o de las posibilidades que ofrezca cada medio probatorio. El vocablo exhaustivo es un adjetivo para expresar algo que se agota o apura por completo. El vocablo agotar hace referencia a llevar una acción de la manera más completa y total, sin dejarla inconclusa ni en la más mínima parte o expresión como lo ilustra el Diccionario de la Lengua Española: "Extraer todo el líquido que hay en una capacidad cualquiera; gastar del todo, consumir, agotar el caudal de las provisiones, el ingenio, la paciencia, agotarse una edición; cansar extremadamente". Sobre el verbo apurar, el diccionario expone, entre otros, los siguientes conceptos: "Averiguar o desentrañar la verdad ahincadamente o exponerla sin omisión; extremar, llevar hasta el cabo; acabar, agotar; purificar o reducir algo al estado de pureza separando lo impuro o extraño; examinar atentamente". La correlación de los significados destacados, con miras a su aplicación al documento en que se asienta una decisión judicial, guía hacia una exigencia cualitativa, consistente en que el juzgador no sólo se ocupe de cada cuestión planteada en el litigio, de una manera o forma cualquiera, sino que lo haga a profundidad, explore y enfrente todas las cuestiones atinentes a cada tópico, despeje cualquier incógnita que pueda generar inconsistencias en su discurso, enfrente las diversas posibilidades advertibles de cada punto de los temas sujetos a decisión, exponga todas las razones que tenga en la asunción de un criterio, sin reservarse ninguna, y en general, que diga todo lo que le sirvió para adoptar una interpretación jurídica, integrar una ley, valorar el material probatorio, acoger o desestimar un argumento de las partes o una consideración de las autoridades que se ocuparon antes del asunto, esto último cuando la sentencia recaiga a un medio impugnativo de cualquier naturaleza. El principio de exhaustividad se orienta, pues, a que las consideraciones de estudio de la sentencia se revistan de la más alta calidad posible, de completitud y de consistencia argumentativa.”**

De lo anterior se advierte, que el Juzgador responsable debe

interpretar la demanda en su integridad, así como causales de improcedencia y sobreseimiento y las constancias que obran en autos, con un sentido de liberalidad y no restrictivo para determinar con exactitud la intención del promovente y en su caso si es procedente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a derecho.

Asimismo, debió haber explorado las causales de improcedencia por ser de cuestión de orden público cuyo análisis puede efectuarse en cualquier instancia sin importar que las partes la aleguen o no, circunstancia que omite tomar en consideración la A quo, dictando una sentencia ilegal.

Además, se advierte que la Magistrada responsable viola en perjuicio de mis representadas los preceptos invocados con antelación; asimismo, no agotó el principio de exhaustividad, al no examinar y valorar las causales de improcedencia y sobreseimiento, conforme a derecho, es decir, la Magistrada de la Causa, no se pronuncia legalmente, en lo que refiere a las causales de improcedencia y sobreseimiento invocadas en el presente juicio, por lo que, solo se basa en los argumentos vertidos por la parte actora, tal y como se observa en la sentencia que se recurre.

De lo cual, me permito manifestar a Usted, **ad quem**, que mis representadas actuaron conforme a derecho toda vez que, en el presente juicio se acredita plenamente que la Magistrada resolutora, al dictar la sentencia, transgrede lo dispuesto por los artículos 4, 26, 74, 75, 128, 129 y 130 del Código de la materia, en razón de que suple las deficiencias de la queja a favor de la parte actora, figura que no se encuentra regulada en el Código de la Materia; toda vez que, solo se basa que mis representadas al emitir los actos reclamados por el actor, no son emitidos por autoridad mismos que se hacen sin la debida fundamentación y motivación, por lo que en ningún momento se le transgrede en su contra derecho fundamental alguno, por lo que se debe confirmar la validez de los actos impugnados por haber sido emitidos conforme a derecho.

Por lo que respecta a lo señalado por la magistrada, en donde indica que:

***“...es para que las autoridades demandadas dejen insubsistente el cobro realizado a la actora mediante Factura con número de folio 2100247787, de veintiuno de enero de dos mil veintiuno, relativo a la cuenta catastral 030-001-005-0107, correspondiente al periodo 01/2021 al 06/2021, respecto al inmueble ubicado en Calle: ----- de esta Ciudad de Acapulco de Juárez, Guerrero, y procedan a emitir el cobro del impuesto predial correspondiente al año dos mil veintiuno, en el que se respete la base gravable relativa a la cuenta catastral 030-001-005-0107, por la cantidad de \$730,701.90 (SETECIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS UN PESOS 90/100 M.N.), correspondiente al año fiscal dos mil veinte, contenida en la FACTURA de Pago con número de folio 2000098563 de fecha veintinueve de enero de dos mil veinte, y de resultar***

***diferencias a su favor se realice la devolución correspondiente.”***

Cabe aclarar que para ejecutar lo anteriormente descrito, las demandadas se encuentran imposibilitadas para realizarlo, puesto que para aplicar dicha modificación, resultaría necesario emplear una ley anterior a la actual, tal es el caso que se ordena se emita el cobro del impuesto predial correspondiente al año 2021, respetando la base gravable correspondiente al año fiscal 2020, resultando que para estos años existen leyes de ingresos distintas, siendo la LEY NÚMERO 638 DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 y la LEY 437 DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, respectivamente, y sobra decir que a la fecha de hoy ya existe una ley de ingresos distinta a los dos anteriores, siendo esta última para el ejercicio fiscal 2022.

Apoya lo anterior la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Guerrero, que nos señala:

*ARTÍCULO 183.- No se podrá recaudar ninguna cantidad por concepto de impuestos o contribuciones que no estén basados en una ley o decreto emanado del Congreso del Estado y sancionados por el Ejecutivo del Estado de Guerrero.*

*1.- El servidor público que realice erogaciones que no estén previstas en las leyes correspondientes, incurrirá en responsabilidad administrativa y responderá con su patrimonio por las afectaciones realizadas. Si las irregularidades se tipifican como enriquecimiento ilícito, será sancionado conforme lo que determine la ley de la materia; y,*

*2.- El año fiscal correrá del primero de enero al treinta y uno de diciembre.*

Siendo entonces que esta autoridad no puede aplicar una ley de ingresos pasada para un ejercicio fiscal actual, siendo el caso que se nos exige aplicar la base gravable determinada por la LEY NÚMERO 437 DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020 a un impuesto que está determinado por un ejercicio fiscal diferente y que a cuya ley corresponde la LEY NÚMERO 638 DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021.

Ahora bien, si la intención de esta resolución es que se le respete una cantidad determinada por una base gravable, cabe destacar que si bien existe una variación entre las bases gravables de los ejercicios fiscales 2020 y 2021, también es destacable que la cantidad pagada por el concepto de impuesto predial resulta ser la misma, tal como podrá observar en las documentales que ya obran dentro del expediente, por lo que, sin contar con lo anterior, fuera posible realizar dicha modificación, la cantidad a pagar por la parte actora sería prácticamente la misma.

Ahora bien, la exigencia para respetar la garantía de audiencia al aquí actor fue dada, en el entendido que se realizó conforme a derecho, y de manera voluntaria por parte del demandante por lo que en ningún momento se transgredieron las garantías de audiencia, legalidad y seguridad jurídica al actor; asimismo, manifesté en líneas que anteceden.

En las relatadas consideraciones, es procedente se revoque la sentencia impugnada, en razón de que, no existe congruencia jurídica por parte de la instructora y no fueron analizadas conforme a derecho ni actualizadas las causales de improcedencia y sobreseimiento, simplemente la sentencia combatida nunca desarrolló la lógica jurídica y la valoración objetiva de todas y cada una de las pruebas y constancias que integren este juicio, máxime cuando su estudio es de manera oficiosa y preferente por ser de orden público e interés social.

En efecto, como podrá observarse de las constancias que obran en el expediente, queda demostrado que la Magistrada de la causa, por la falta de congruencia jurídica legalidad y exhaustividad, ha transgredido el orden normativo, en tal consideración solicito a ustedes Magistrados, revoquen la sentencia que se recurre y emitan otra debidamente fundada y motivada, dictando el sobreseimiento del presente juicio o en su defecto se emita otra en la que se declare la validez del acto impugnado.

**IV.-** Substancialmente señala la parte recurrente en sus agravios lo siguiente:

- En relación al **primer agravio** refiere que le causa perjuicio la sentencia definitiva que recurre, porque vulnera en perjuicio de sus representadas lo previsto en el Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, los principios de Exhaustividad; Congruencia Jurídica, Legalidad y de Igualdad de partes que debe contener toda sentencia.
- De igual forma señala que le causa afectación el hecho de que la resolutoria sólo se pronuncia respecto de las causales de improcedencia que son infundadas lo que les deja en incertidumbre jurídica, y dejó de considerar las demás invocadas por sus representadas, en relación a la extemporaneidad de la demanda, con fundamento en el artículo 78 fracción XI, en relación con el arábigo 79 fracción II del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero.
- En el **segundo** agravio señala que es violatorio lo determinado por la Magistrada Instructora al haber declarado la nulidad de los actos impugnados por la supuesta falta de motivación y fundamentación bajo el argumento de que no se establecieron las razones particulares, ni las causas inmediatas que tuvieron en consideración para la emisión de los actos impugnados; así

mismo señala que no fundó la competencia de la autoridad que emitió los actos reclamados por el actor del juicio de nulidad; ni se tomaron en cuenta que las tablas de valores unitarios de uso de suelo y construcción sufrieron modificación de acuerdo a la Ley de Ingresos vigente; por lo que, el pago realizado por el contribuyente es el mismo al del año inmediato anterior, de ahí que no le ocasiona perjuicio alguno al patrimonio del demandante.

- Continúa manifestando que la Magistrada Instructora debió interpretar la demanda en su integridad, así como las causales de improcedencia y sobreseimiento, y las constancias que obran en autos, con un sentido de liberalidad y no restrictivo para determinar con exactitud la intención del promovente, con la finalidad de impartir una recta administración de justicia al dictar la sentencia combatida.
- Por lo que solicita se revoque la sentencia que se recurre y emitan otra ajustada a derecho, en la que se dicte el sobreseimiento del juicio o en su defecto se declare la validez del acto reclamado.

Ahora bien, esta Plenaria considera que los agravios invocados por la parte revisionista son **infundados e inoperantes** para modificar o revocar la sentencia definitiva de fecha **veintitrés de marzo de dos mil veintidós**, dictada en el expediente **TJA/SRA/II/803/2021**, en atención a las siguientes consideraciones:

De inicio, esta Sala se pronunciará respecto del primer agravio invocado por las autoridades demandadas, tendiente a actualizar las causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio, en virtud de que al ser cuestiones de orden público e interés social, su estudio es preferente.

Al respecto, esta Sala Superior considera que es infundado el agravio en el que refieren que en la sentencia recurrida no se analizó la extemporaneidad de la presentación de la demanda, ya que en el considerando **SEGUNDO**, se observa que la Magistrada de la Sala de origen se pronunció al respecto, y determinó que es infundada la causal de improcedencia y sobreseimiento relativa a la extemporaneidad de la presentación de la demanda, en virtud de que derivado del *“Acuerdo de diecisiete de marzo de dos mil veinte, aprobado por el Pleno de la Sala Superior de este Órgano Jurisdiccional, en cumplimiento al Acuerdo por el que se declaró como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-COV2 (COVID)”*, publicado el treinta de marzo del año en mención en el Periódico Oficial de la Federación, se decretó la suspensión de todos los términos procesales de los juicios que se estaban sustanciando en las Salas Regionales y Superior de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, suspensión que



*se prorrogó nuevamente del uno al treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno; no obstante, lo anterior, el Pleno de este Órgano Jurisdiccional, consideró que debido al prolongado periodo de suspensión de plazos procesales decretado desde el inicio de la declaración de la pandemia de diecisiete de marzo de dos mil veinte, a la fecha del uno al treinta de marzo de dos mil veintiuno, se ordenó reincorporar actividades que permitieran anticipar el quehacer jurisdiccional, con la finalidad de evitar congestionamientos al momento de levantarse la suspensión de los plazos correspondientes; determinado que los justiciables podrían presentar sus escritos de demanda ante las oficialías de partes de cada Sala, a partir del dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, para el único efecto de que fueran registradas y radicadas, en la inteligencia que serían notificadas a partir del primer día hábil en que se aperturaran los plazos procesales, apertura que sucedió el uno de junio de este año dos mil veintiuno, en atención a que el Gobernador del Estado, como Presidente del Consejo Estatal de Salud, informó mediante publicación en el Periódico Oficial del Estado de veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, con base a las estadísticas y seguimiento de los contagios por la enfermedad COVID-19, debido a la disminución del número de contagios, todos los Municipio del Estado transitaron a semáforo verde; es así, que las actividades jurisdiccionales se aperturaron a partir del uno de junio de este año dos mil veintiuno, de ahí que, aun cuando el actor señaló que tuvo conocimiento del acto, el día tres de marzo de dos mil veintiuno, y la demanda fue recibida en esta Sala Regional el día veintiuno de junio de dos mil veintiuno, (...) en consecuencia, no se pueden considerar como actos consentidos, en virtud de que no se aperturaban los plazos procesales (...).”*

Así pues, sí la actora manifestó tener conocimiento de los actos impugnados el día tres de marzo de dos mil veintiuno y presentó su escrito de demanda hasta el veintiuno de junio de ese mismo año; entonces, **sí desde el dieciocho de marzo de dos mil veinte hasta el treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno**, se estableció la suspensión de los términos procesales ante éste Tribunal, **reanudándose el uno de junio de dos mil veintiuno**, por lo que es, evidente que la demanda se presentó dentro de los quince días hábiles, de conformidad con lo que establece el artículo 49 en relación con el diverso 14, ambos del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, número 763, que por tal motivo, no se actualiza la causal de improcedencia, establecida en el numeral 78, fracción XI, del Código de la materia.

Entonces, se tiene que la actora conoció de la liquidación del impuesto predial el tres de marzo de dos mil veintiuno, (fecha en que se encontraba cerrado

el Tribunal como medida preventiva para evitar el contagio de Covid 19) y presentó su demanda el veintiuno de junio de ese mismo año; siendo que el día uno de junio de dos mil veintiuno, empezaron a correr los términos procesales relacionados con el juicio contencioso; en ese sentido, se tiene que la demanda se presentó dentro del término previsto en el artículo 49 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, de ahí que el agravio relativo a la presentación extemporánea de la demanda es **infundado**.

Por otra parte, respecto del segundo agravio en que la parte recurrente manifestó que contrario a lo señalado en la sentencia definitiva, los actos impugnados se encontraban debidamente fundados y motivados, en razón de que las tablas de valores unitarios de uso de suelo y construcción sufrieron modificación de acuerdo a lo que dispone la Ley; al respecto, es de señalarse que la Magistrada instructora determinó en la sentencia que se recurre, que no se respetaron las formalidades del procedimiento como son las garantías de audiencia, seguridad y legalidad jurídica que todo acto de autoridad debe contener, tal y como lo disponen los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que el Director de Catastro e Impuesto Predial del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, autoridad demandada, admitió que no existió una revaluación catastral del inmueble de la actor y solamente utilizó las tablas de valores unitarios de suelo y construcción, por lo que, a juicio de la juzgadora no se aprecia precepto legal alguno en el que funde y motive la determinación del incremento de la base gravable, lo cual resulta ilegal, en razón de que el acto impugnado debe contener las normas legales que facultan a las autoridades administrativas para emitir el acto de molestia de que se trate, precisando con claridad y detalle, el apartado, la fracción o fracciones, incisos y subincisos, en que apoyen su actuación, causando perjuicio a la parte actora al no darle a conocer la existencia del procedimiento llevado a cabo, ni las operaciones aritméticas, para determinar la nueva base gravable; en consecuencia, de conformidad con el artículo 138 fracción II del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa declaró la nulidad de la base gravable, y cobro del impuesto predial.

Criterio que comparte esta Sala Revisora, en virtud de que las autoridades demandadas determinaron el incremento de la base gravable para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, y que fue la cantidad de \$2,922,807.60 (DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS 60/100 M. N.), en comparación con la base gravable del año de dos mil veinte, que era la cantidad de \$730,701.90 (SETECIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS Y UN PESOS 90/100 m. n.), sin especificar qué procedimiento se utilizó para determinar

la nueva base gravable, ni señalan alguna disposición jurídica que así lo establezca, dejando en completo estado de indefensión al desconocer los ordenamientos y motivos legales que se aplicaron en la factura con número de folio 2100247787 de fecha veintiuno de enero de dos mil veintiuno, situación que trae como consecuencia, que la referida factura transgreda lo previsto por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.3o.C.52 K, con número de registro 184546, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Abril de 2003, Página 1050 cuyo rubro y texto es el siguiente:

**ACTOS DE MOLESTIA. REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN REVESTIR PARA QUE SEAN CONSTITUCIONALES.**

De lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Federal se desprende que la emisión de todo acto de molestia precisa de la concurrencia indispensable de tres requisitos mínimos, a saber: 1) que se exprese por escrito y contenga la firma original o autógrafa del respectivo funcionario; 2) que provenga de autoridad competente; y, 3) que en los documentos escritos en los que se exprese, se funde y motive la causa legal del procedimiento. Cabe señalar que la primera de estas exigencias tiene como propósito evidente que pueda haber certeza sobre la existencia del acto de molestia y para que el afectado pueda conocer con precisión de cuál autoridad proviene, así como su contenido y sus consecuencias. Asimismo, que el acto de autoridad provenga de una autoridad competente significa que la emisora esté habilitada constitucional o legalmente y tenga dentro de sus atribuciones la facultad de emitirlo. Y la exigencia de fundamentación es entendida como el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer el acto de autoridad, presupuesto que tiene su origen en el principio de legalidad que en su aspecto imperativo consiste en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite; mientras que la exigencia de motivación se traduce en la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. Presupuestos, el de la fundamentación y el de la motivación, que deben coexistir y se suponen mutuamente, pues no es posible citar disposiciones legales sin relacionarlas con los hechos de que se trate, ni exponer razones sobre hechos que carezcan de relevancia para dichas disposiciones. Esta correlación entre los fundamentos jurídicos y los motivos de hecho supone necesariamente un razonamiento de la autoridad para demostrar la aplicabilidad de los preceptos legales invocados a los hechos de que se trate, lo que en realidad implica la fundamentación y motivación de la causa legal del procedimiento.

En relación al argumento de que las autoridades demandadas se encuentran imposibilitadas para la emisión de una nueva liquidación del impuesto predial por el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, en la que tome en consideración el monto de la base gravable del ejercicio fiscal dos mil veinte, puesto que señala que para aplicar dicha modificación, resultaría necesario emplear una ley anterior a la actual, ya que para ambos años existen leyes de ingresos distintas, siendo la

Ley número 638 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, y la Ley número 437, de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio dos mil veinte, al respecto, a juicio de esta Sala Colegiada dicho argumento resulta **infundado** en virtud de que si bien las leyes de ingresos que refiere comprende del uno de enero al treinta de diciembre de cada año, también es verdad que el efecto dado por la Magistrada de la Sala Regional Acapulco I, en la sentencia recurrida, es para que las autoridades demandadas dejen insubsistente la factura con número de folio 2100247787 de fecha veintiuno de enero de dos mil veintiuno, y procedan a emitir el cobro del impuesto predial correspondiente al año dos mil veintiuno, en el que se respete la base gravable correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veinte, esto es, porque se declaró la nulidad del incremento de la referida base gravable dos mil veintiuno, al no cumplir la demandada con las formalidades que legalmente debe revestir para determinar su incremento.

Aunado a lo anterior, de conformidad a los artículos 139 y 140 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, el objeto del juicio de nulidad es restituir a los particulares en el pleno goce de los derechos indebidamente afectados o desconocidos cuando resulte procedente la demanda, por lo que deben restablecerse las cosas al estado que guardaban antes de la afectación, y ello sólo se obtiene al dejar sin efectos la base gravable impugnada en el juicio de origen, por el ejercicio dos mil veintiuno, contenida en la factura con número de folio 2100247787 de fecha veintiuno de enero de dos mil veintiuno, que se aplicó al inmueble con número de cuenta catastral 030-001-005-0107.

Bajo esa perspectiva, en el caso concreto la sentencia definitiva de fecha veintitrés de marzo del dos mil veintidós, se emitió conforme a los artículos 136 y 137 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, y no se transgreden los principios de exhaustividad y congruencia jurídica, de legalidad, seguridad jurídica y de igualdad de partes; atento a la tesis aislada con número de registro 803,585, publicada en la página 27, volumen cuarta parte, C. V., del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que al respecto dice:

**CONGRUENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES, PRINCIPIO DE LA.** El principio de la congruencia de las resoluciones judiciales se refieren a la concordancia que debe existir entre las pretensiones de las partes, oportunamente deducidas en el pleito, y lo que resuelve el juzgador en relación con dichas pretensiones.

Por otra parte, por cuanto al argumento relativo a que *“... el artículo 9, incisos f) y g) de la Ley de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez,*

*Guerrero, para el ejercicio Fiscal dos mil veintiuno, no vulnera los artículos 16 y 31 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni los principios de proporcionalidad y equidad, ya que la figura jurídica de estímulo fiscal no atiende la capacidad económica de los sujetos obligados, sino al beneficio que genera a los contribuyentes que presentan condiciones específicas; sin que el aludido estímulo incida en los elementos esenciales de la contribución, ni en otro que forme parte de su mecánica sustancial...”;* a juicio de esta Sala Revisora es **inoperante**, en virtud de que la actora se inconformó por el incremento de la base gravable del inmueble de su propiedad para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, contenido en la factura con número de folio 2100247787 de fecha veintiuno de enero de dos mil veintiuno, no lo relacionado a la aplicación de los estímulos fiscales.

Finalmente, esta Plenaria concluye que los agravios expuestos por la autorizada de las autoridades demandadas no controvierten los razonamientos y fundamentos legales en que se apoyó la sentencia recurrida, sino que sólo reiteran las manifestaciones que, en su momento se hicieron valer al contestar la demanda de nulidad, en consecuencia, dichos agravios deben considerarse inoperantes, pues de ellos no se advierte materia sobre la cual justipreciar la ilegalidad de la decisión jurisdiccional recurrida.

Al respecto, sirve de apoyo la consideración de la tesis I.5o.A.9 A (10a.), con número de registro 2016904, localizable en el Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 54, mayo de 2018, Tomo III, que establece lo siguiente:

**AGRAVIOS INOPERANTES POR INSUFICIENTES EN EL RECURSO DE REVISIÓN FISCAL. LO SON AQUELLOS QUE SÓLO REITERAN LAS MANIFESTACIONES QUE, EN SU MOMENTO, SE HICIERON VALER AL CONTESTAR LA DEMANDA DE NULIDAD.** En atención al principio de estricto derecho que impera tratándose del recurso de revisión fiscal, la autoridad recurrente tiene la carga procesal de formular sus agravios de forma clara y concisa, e identificar las consideraciones del fallo impugnado con las que se inconforma, así como los planteamientos de derecho que soportan las razones particulares de su disenso, para lo cual debe existir una notoria congruencia entre esos señalamientos, de modo que se evidencie, cuando menos, una causa de pedir impugnativa. Por tanto, cuando los argumentos expresados al efecto no controviertan los razonamientos y fundamentos legales en que se apoyó la sentencia anulatoria recurrida, sino que sólo reiteran las manifestaciones que, en su momento, se hicieron valer al contestar la demanda de nulidad, deben considerarse inoperantes por insuficientes, pues de ellos no se advierte materia sobre la cual justipreciar la legalidad de la decisión judicial impugnada objeto del recurso.

**LO SUBRAYADO ES PROPIO.**

En las narradas consideraciones, y en ejercicio de las facultades jurisdiccionales que el artículo 190 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, número 763, confiere a esta Sala Colegiada, es procedente confirmar la sentencia definitiva de fecha veintitrés de marzo de dos mil veintidós, dictada en el expediente número TJA/SRA/II/803/2021, por la Magistrada de la Sala Regional Acapulco I de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado.

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por los artículos 190, 192, fracción V, 218, fracción VIII, y 222 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero y 21, fracción II, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, es de resolverse y se;

## R E S U E L V E

**PRIMERO.** Resultan **infundados e inoperantes** los agravios expresados por las demandadas para revocar la sentencia recurrida, a que se contrae el toca número **TJA/SS/REV/242/2023**; en consecuencia;

**SEGUNDO.** Se confirma la sentencia definitiva de fecha **veintitrés de marzo de dos mil veintidós**, dictada por la Magistrada de la Sala Regional Acapulco I de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, en el expediente número **TJA/SRA/II/803/2021**, por las consideraciones expuestas en el considerando cuarto de la presente sentencia.

**TERCERO.** Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 30 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, número 763.

**CUARTO.-** Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase el expediente principal a la Sala Regional de origen y en su oportunidad, archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido.

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los Magistrados **LUIS CAMACHO MANCILLA, OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, MARTHA ELENA ARCE GARCÍA, HÉCTOR FLORES PIEDRA** y **EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS**, siendo ponente en este asunto la segunda de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos Licenciado **JESÚS LIRA GARDUÑO**, que da fe.

**LIC. LUIS CAMACHO MANCILLA.  
MAGISTRADO PRESIDENTE**

**MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA  
GODÍNEZ VIVEROS.  
MAGISTRADA**

**DRA. MARTHA ELENA ARCE GARCÍA.  
MAGISTRADA**

**DR. HÉCTOR FLORES PIEDRA.  
MAGISTRADO**

**DRA. EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS.  
MAGISTRADA**

**LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO.  
SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS**

Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente **TJA/SRA/I/803/2021**, de fecha treinta de marzo de dos mil veintitrés, referente al toca **TJA/SS/REV/242/2023**, promovido por las **autoridades demandadas**.

**TOCA NUMERO: TJA/SS/REV/242/2023.  
EXPEDIENTE NUMERO: TJA/SRA/I/803/2021.**